

Santiago, trece de noviembre de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que en el procedimiento ejecutivo seguido ante el Segundo juzgado Civil de San Miguel, bajo el rol C-1022-2021, caratulado “Ilustre Municipalidad de El Bosque con Importadora Petrogas Ltda”, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por la parte ejecutada en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel de trece de julio de dos mil veintitrés, que revocó el fallo de primer grado de veintiocho de junio de dos mil veintidós y, en su lugar, acogió parcialmente la excepción del artículo 464 N°9 del Código de Procedimiento Civil.

Segundo: Que el recurrente denuncia la infracción de los artículos 1570 y 1698 del Código Civil en relación con los artículos 464 N°9, 342 N°1, 346 N°3, 426 y 427 del Código de Procedimiento Civil. Asegura que se ha liberado a la ejecutante de probar la razón de aceptar o recibir pagos parciales en el presente caso, sin reclamar por otros saldos anteriores adeudados. Agrega que junto con ello se ha vulnerado lo dispuesto en los artículos 47, 1712 del Código Civil y artículos 342 y 346 del Código de Procedimiento Civil, esto es, no dar valor probatorio a instrumentos públicos y a un instrumento privado que no fue objetado en juicio, llegando a acoger sólo parcialmente la excepción de pago opuesta por su parte.

Tercero: Que el tribunal de alzada acogió parcialmente la excepción de pago sobre la base de lo consignado en el motivo tercero del fallo recurrido, esto es, que la parte ejecutante reconoció en estrados el pago de la suma \$1.018.366, reconocimiento que es suficiente para tener por legalmente acreditado que la parte ejecutada realizó el referido pago parcial de la acreencia que por esta vía procesal se persigue, razón por la cual corresponde acoger la excepción de pago opuesta por la ejecutada, pero sólo parcialmente.

Luego, en el considerando cuarto del fallo recurrido la Corte de Apelaciones concluyó que los demás documentos acompañados son insuficientes para probar que el saldo restante haya sido solucionado por la parte ejecutada. Al efecto, advirtió que la prueba documental rendida ante el tribunal de primer grado dice relación con otros pagos y que no es pertinente al cobro materia de este juicio. Mientras que respecto al instrumento acompañado en segunda instancia -aquel que da cuenta que en la página web de la municipalidad ejecutante no se registran deudas respecto el recurrente- carece de la naturaleza y entidad suficiente para demostrar que la obligación cuyo cumplimiento se persigue haya sido efectivamente solucionada.

Cuarto: Que el sustrato fáctico recién señalado resulta inamovible para este Tribunal de Casación, en tanto la recurrente no denunció, de modo eficiente, la



vulneración de las normas reguladoras de la prueba, lo que habría permitido, una vez constatada tal infracción, analizar las probanzas de autos y, en su caso, modificar los hechos establecidos por los sentenciadores.

En efecto, no se configura la infracción del artículo 1698 del Código Civil pues esta regla se infringe cuando la sentencia obliga a una de las partes a probar un hecho que corresponde acreditar a su contraparte, esto es, si se altera el *onus probandi* y, en la especie, la prueba de la demandada fue calificada de insuficiente para tener por acreditado el pago que alega. Luego, tampoco se advierte contravención de los artículos 342 y 346 del Código de Procedimiento Civil ni del artículo 1702 del Código Civil pues las alegaciones de la recurrente son de carácter genérico y se orientan más bien a promover que esta Corte realice una nueva valoración de la prueba documental, actividad que resulta ajena al recurso de casación.

Luego, mención aparte merece la denuncia de infracción de los artículos 1712 del Código Civil en relación con los artículos 426 y 427 del Código de Procedimiento Civil, puesto que la facultad prevista en dichos preceptos legales para calificar la gravedad, precisión y concordancia de las presunciones que permitan asignarles valor probatorio es ajena al control de legalidad que ejerce este Tribunal de Casación y corresponde a un proceso racional de los jueces del mérito que no está sujeto al control del recurso de casación en el fondo.

Quinto: Que, entonces, de la lectura del recurso resulta evidente que lo que se ataca por esta vía no corresponde propiamente a la infracción de una ley imperativa, sino la ponderación judicial de la prueba rendida. En estas condiciones, sólo cabe constatar que la actividad destinada a apreciar y ponderar las probanzas rendidas en juicio se agotó con la determinación que a este respecto hicieron los jueces del fondo, quienes –en uso de sus facultades privativas– dejaron establecido sólo el pago parcial de la obligación. En efecto, lo razonado impone concluir que la infracción del artículo 464 N°9 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 1570 del Código Civil, que la recurrente estima se configura, requieren desvirtuar el supuesto fáctico fundamental asentado por los jueces del fondo, el que resulta inmodificable para este Tribunal de Casación.

Sexto: Que, por estas consideraciones el presente recurso de casación en el fondo no podrá prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 772 y 782 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Roberto Espinal Muñoz, en representación de la ejecutada en contra de la sentencia de trece de julio de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.



Regístrese y devuélvase vía interconexión.

Rol N° 195.257-2023.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Arturo Prado Puga, señor Mauricio Silva Cancino, señora María Angélica Repetto García, y los Abogados integrantes señor Raúl Patricio Fuentes M. y señor Eduardo Morales R.

No obstante, haber concurrido a la cuenta de admisibilidad y al acuerdo, no firma el Ministro señor Prado, por estar en comisión de servicio y el Abogado integrante señor Fuentes, por ausencia.



GDGQXJBHDVL

null

En Santiago, a trece de noviembre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

